

Democracia como liturgia



Allá por 2008 dábamos cuenta en nuestros editoriales de un hecho sorprendente: diversos políticos, economistas y científicos sociales que habían sido paladines de la defensa del capitalismo y del neoliberalismo afirmaban que era imprescindible reformarlo. Dudábamos de ello y apelábamos como criterio de verdad de sus intenciones a la práctica y al transcurrir del tiempo. Ya hubo suficiente.

La reacción de las clases populares a la mastodóntica crisis de acumulación de capital tardó un poco más y se produjo a escala mundial. Desde las primaveras árabes a las revoluciones de colores, pasando por Occupy Wall Street y, quizás, la más exitosa de ellas: el 15M. El hilo común a todas ellas es que su reivindicación principal era un aumento o mejora de la democracia, la secundaria, una defensa de los servicios públicos crecientemente amenazados, y, por último, en aras de la concordia y la paz, una difusa denuncia del empeoramiento en las condiciones laborales sin nada concreto para su mejora: en el mejor de los casos una vuelta al status quo anterior de las relaciones laborales y diversas formas de renta básica para mejorar, supuestamente, las posibilidades de negociación de los explotados. De un cuestionamiento radical del capitalismo, que hasta sus máximos defensores tuvieron que asumir momentáneamente, hemos pasado al conservadurismo, que se convierte en manos de la Internacional Socialista en reacción, de la propuesta de un regreso al Estado del Bienestar contra la oleada neoliberal.

En un libro de Arrighi, Hopkins y Wallerstein de principios de los 90, *Movimientos antisistémicos*, los autores hacían balance de lo sucedido entre 1968 y finales de los 80: «La historia de la economía-mundo capitalista desde 1973 ha sido la historia de sus ajustes frente a los levantamientos sociales de los cinco años anteriores. Este ajuste ha sido problemático, induciendo a algunos a hablar de una crisis general del capitalismo, dado el alcance, espontaneidad y simultaneidad de los cambios producidos en las relaciones de poder por tales levantamientos sociales. Cuando los cambios en las relaciones de poder son limitados y parciales, como sucede habitualmente, la economía-mundo capitalista puede introducir sin dificultad cambios imperceptibles en la asignación global de recursos y en la distribución de recompensas. Pero cuando los cambios son numerosos, significativos y simultáneos, como lo fueron el período 1968-1973, entonces la adaptación a los mismos implica desorganizaciones duraderas y serias de las pautas económicas y sociales». Consideramos que dos de sus conclusiones posteriores son imprescindibles para organizar todo lo que está ocurriendo.

En primer lugar, paradójicamente, a causa de la mejora de su posición de poder, esas desorganizaciones habrían producido un nulo incremento del bienestar material de los grupos subordinados. En virtud de ellas, la economía-mundo habría disminuido su propensión a distribuir recompensas y los grupos subordinados habrían sido los más vulnerables. «Podemos preguntarnos, sin embargo, si este fracaso para proporcionar bienestar a partir de un equilibrio de poder más favorable, no podría estar haciendo oscilar el poder de nuevo a favor de los grupos dominantes».



En segundo lugar: «La reacción cultural y política de finales de los años setenta y de la década de los ochenta contra todo lo que significó 1968 parece sugerir que esto es en realidad lo que está sucediendo. Los Estados del Tercer Mundo se han enzarzado profusamente en una enemistosa e intensa competencia económica, aunque todavía afirman de boquilla una solidaridad entre ellos que de hecho no existe. Las generaciones más jóvenes, las mujeres, las 'minorías', han pasado, aunque en diferentes grados, de las preocupaciones colectivas a las individuales, mientras que entre los trabajadores la solidaridad de clase y la unidad política se hallan, en casi todas partes, bajo mínimos históricos. Y en los epicentros de la lucha por la democracia política, el deseo de una mayor libertad se halla a menudo paralizado por los temores a la desorganización económica».

Estas son las bases materiales del carácter reaccionario que ha tomado el reflujó de los movimientos, cuyos errores históricos se están pagando. Si en 1968 el sector hegemónico consideraba que «el varón blanco y rico es la única amenaza», hoy ya podemos evaluar que la diana no era tan diáfana. En definitiva, cuatro o cinco años después del inicio del último ciclo de movilización mundial, vemos dictaduras abiertas en los países árabes y fascistas en Ucrania, Hungría y Polonia; guerras en el Norte de África, Medio Oriente y el Este europeo; la bandera yanqui ondea en el Malecón de La Habana; el asesinato, el tráfico y el uso como esclavas sexuales de mujeres por miles; una crisis de refugiados, que se ahogan en el Mediterráneo y se asfixian en camiones, como no se había conocido en la historia; la humillación de Grecia por el Eurogrupo, un órgano que ni siquiera existe en los tratados europeos; la Ley Mordaza, la reforma ad hoc de la Ley Electoral en el ámbito municipal y el robo del voto a los emigrantes españoles; los desahucios resueltos por la Junta de Andalucía comprando a los bancos las viviendas sometidas a ejecución hipotecaria; el intento de revitalizar la burbuja inmobiliaria del PP mediante la reforma de la Ley de Montes para poder construir en suelo quemado en caso de que exista un «interés general». Este interés general es el suelo quemado en el que se reconstruye la hegemonía burguesa y desde el que cabe preguntarse en qué puede consistir *La democracia económica*, título del artículo que recogemos de José Daniel Lacalle, reconocido autor miembro de la Fundación de Investigaciones Marxistas.

4

Los diferentes estratos del tablero político mundial están acogiendo numerosos acontecimientos en pleno desarrollo en la lucha por la democracia. Uno de los más importantes para la izquierda y el comunismo europeos ha sucedido en la que es considerada la cuna de la democracia occidental: Grecia.

El referéndum griego, la posterior firma del memorando por el gobierno de Syriza, así como la dimisión y convocatoria de elecciones de Tsipras es ejemplo claro de los límites externo e interno de la democracia en el seno de la UE. La contradicción entre el éxito del OXI (No) en el referéndum y el posterior acuerdo con la Troika (aun con la posición ambigua adoptada por el FMI, dependiente de la posición de EEUU en la lucha interimperialista, como demostró Schäuble cuando propuso un trueque de Grecia por Puerto Rico) merece una mirada detenida.

En general, los análisis acerca de la firma del tercer rescate que desmantela el programa de Salónica se resumen en: 1) Syriza siempre ha sido un partido de la burguesía pero con un matiz moderno y progresista (posición del KKE); 2) ha traicionado a su pueblo (significante que habría que desglosar en su configuración de alianza de clases) y, por lo tanto, ha claudicado o en su inversión directa: cedió ante el chantaje; 3) que todo era un juego e iban de farol; 4) que fue a cazar dragones con un cazamariposas, expresión de Juan Carlos Monedero, lo que implicaría que la correlación de fuerzas en UE no permitiría esa salida; 5) Un error estratégico puesto que no se preparó la posibilidad de la salida ordenada del euro durante las negociaciones, a pesar de que Syriza cuenta entre sus miembros a defensores de la salida del euro como Lapavistas o Plataforma de Izquierdas -ahora Unidad Popular - (por ejemplo, Perry Anderson ha defendido esta postura).

Sin embargo, las claves están en otros dos aspectos: los límites de la propia configuración del nivel jurídico-político en la UE y, particularmente, la conformación y la hegemonía dentro de la alianza de clases que sostiene Syriza. Los datos del referéndum demuestran que el núcleo del apoyo a Syriza está en la clase obrera y otras clases populares, incluida la militancia del KKE (el KKE propuso una papeleta inválida al referéndum que incluía la petición de salida de la UE que obtuvo apenas algo más del 1% de los votos, mientras que en las elecciones de septiembre alcanzó casi el 6%) que apostaron por OXI (el OXI obtuvo más del 80% de los votos en los barrios obreros y populares). Pero la hegemonía dentro de Syriza no la ejerce el proletariado, sino la pequeña burguesía progresista (lo que Kouvalakis ha llamado «europeísmo de izquierdas») cuyo horizonte trata la recomposición del bloque en el poder en torno a una burguesía nacional sin un enfrentamiento directo a la burguesía compradora dependiente de los intereses imperialistas (EEUU y el centro de la UE), que sería la mejor traducción del «fin de la austeridad dentro de la eurozona». Está además muy condicionada por: 1) su posición en la cadena imperialista (quizá el mayor éxito de Syriza consistió en enfrentar las estrategias de los dos miembros de la cadena imperialista que la presionan, particularmente por el miedo del FMI-EEUU a que junto a la salida del euro se produjera una salida de la OTAN -EEUU cuenta con cuatro bases militares en territorio griego-) y la respuesta encontrada en su búsqueda de aliados fuera del marco UE-EEUU (Stavros Karagounis sostuvo que Rusia y China, cuando el gobierno griego acudió en busca de su apoyo, indicaron que la necesitaban dentro del euro); y 2) la debilidad del capital griego como muestra la baja productividad (plusvalía relativa) de la industria griega que es alrededor del 45% de la productividad alemana (78% España), aunque se trate de compensar la tasa de plusvalía aumentando brutalmente la plusvalía absoluta, 2042 horas de trabajo anuales frente a las 1371 alemanas (España 1639).

La toma de decisiones del gobierno griego corresponden a la hegemonía y contradicciones dentro de la propia organización, su posición en la cadena imperialista y las debilidades del capitalismo griego.

Las contradicciones de esta alianza se agudizaron y provocaron primero la ruptura de la unidad de voto del partido, la dimisión de Tsipras (en lo que fue el último intento de que Syriza no se descosiera), la convocatoria de elecciones el 20 de septiembre y, quizá lo más relevante, la aparición de Unidad Popular que intenta reconfigurar la alianza de clases con una estrategia distinta respecto al segundo aspecto clave en la situación griega. Este aspecto lo constituye la imposibilidad de que dentro de la eurozona se respeten los marcos electivos estatales de las democracias burguesas; no principalmente porque se impongan con formas más o menos jurídicamente establecidas (el Eurogrupo, como ya hemos dicho, ni siquiera tiene una existencia jurídica formal ni criterios estables de adopción de acuerdos) las medidas del capital financiero, sino porque el propio marco de las decisiones estatales ha sido tan laminado y despojado de contenido que sólo permite dos salidas: ganar tiempo a la espera de que otras fuerzas similares ganen poder en los países miembros y se permitan otras políticas (Balibar o Zizek defienden esta posición) o la salida del euro (y la UE), la recuperación de la «soberanía nacional», con lo que se podrían adoptar medidas unilaterales como la suspensión de pago de la deuda, nacionalizaciones, etc. (sus defensores van desde Oskar Lafontaine al KKE), que posteriormente busque como aliados al resto de países periféricos europeos frente a las «potencias del eje».

No obstante, sí queremos alertar sobre el error que supone la alegre responsabilización de Alemania de todos los males europeos ya que oculta la explotación capitalista en un mar de relaciones centro/periferia. Sin negar su importancia, la hipótesis de que si nos libramos del yugo alemán, viviremos en un capitalismo con rostro humano, keynesiano y de gran demanda agregada, es dudosa. Ya señalaron en el número 44 de Laberinto Iván Gordillo y Xabier Arrizabal, por separado, que 7 millones de trabajadores alemanes viven con menos de 450 euros mensuales, más del 25% de los jóvenes alemanes está en riesgo de pobreza, el 30% de la población total (esto últimos dos datos son del año 2011). No sólo necesitamos a los pueblos griego, portugués



o italiano, la clase obrera alemana es explotada del mismo modo que la española, portuguesa, griega o italiana y la necesitamos en un marco europeo de lucha contra el capitalismo. Al fin y al cabo, esa es la escala mínima en la que operan quienes dominan.

La drástica bajada en la participación en las elecciones griegas, con obligatoriedad del voto incluida, 54,55% (un 9% menor que en enero, pero, es más, un 20% menor que en las elecciones legislativas de 2007, las primeras en las que Syriza obtuvo representación parlamentaria), indica claramente la desmovilización popular producida al menos dentro del marco parlamentario (Lazafanis afirmó tras la firma del memorando que Tsipras también había trabajado por la demovilización en las calles). Pero significa también un duro varapalo para Unidad Popular, un 2,8% de los votos (que se suman al descenso de la participación), y debilita a los que mantienen una estrategia similar en España: una alianza interclasista como por la que ha apostado Syriza pero en un horizonte de salida del euro, como acabamos de analizar.

Los últimos meses griegos nos dejan también una lección básica para las clases populares en el estado burgués: la democracia como elección y no como decisión. Esto es mucho más que una precisión semántica, tiene consecuencias definitivas y funestas para aquellos que pretenden una reforma del estado. Aunque mayoritariamente el pueblo griego (y aquí el significativo pueblo son las clases populares que votaron masivamente OXI) clamó contra la firma de un nuevo memorando, el gobierno electo, contra la decisión del pueblo, firmó el memorando. Previamente hemos dejado claras las circunstancias de la firma, pero este análisis no puede soslayar esta otra gran enseñanza. Tema que toca tangencialmente el artículo *La democracia y su límite* de Jesús Ruiz Moreno, miembro del Consejo de Redacción.

6

Buena parte de este número especial de Laberinto lo dedicamos a hacer explícitos los diversos límites que se encuentra la democracia para representar el sentido de universalidad que se le presupone en una formación social concreta. En este sentido no hay que olvidar que la democracia se ha definido siempre con criterios de exclusión que varían históricamente: edad, género, etnia, nacionalidad y, muy especialmente hoy, clase social. Si bien la democracia burguesa actual solo mantiene como criterios de exclusión temporales la edad y la nacionalidad, lo cierto es que las condiciones de vida de la clase trabajadora suponen un condicionante de considerables dimensiones a la participación política efectiva. La lucha y la preocupación constante por la supervivencia en condiciones precarias, las dificultades para acceder a la información y para abarcar el lenguaje jurídico que todo lo impregna y, fundamentalmente, el hecho de que *lavorare stanca* es tratado por Patricia García Espín, miembro del Consejo de Redacción, en *¿Sigue siendo la democracia participativa una propuesta emancipadora?* Por otra parte, la contradicción de que hablemos de sociedades democráticas cuando no existe democracia en lugares tan importantes para la vida como los centros de trabajo, donde cualquier aspecto democrático está marcado por el poder del empresario, es expuesta por Iñaki Gil de San Vicente en *Autogestión socialista vs. autogestión reformista*.

Cualquier forma de «democracia» tiene que ser consecuente con la «libertad» y si no, no lo es. Pero la libertad en el capitalismo es la de permitir que los procesos de concentración y centralización del capital se desarrollen con «normalidad» y cualquier obstáculo, incluidas las sentencias judiciales, luchas populares y obreras o legislaciones de los parlamentos nacionales que se puedan oponer a este fenómeno, tiene que ser removido. En agosto pasado, conocimos el proyecto de fusión de la española Coca-Cola Iberian Partners con la estadounidense Coca-Cola Enterprises y la alemana Coca-Cola Erfrischungsgetränke para formar Coca-Cola European Partners, la primera embotelladora mundial del sector, y que «facturará 12600 millones de dólares anuales, cotizará en tres bolsas –Nueva York, Ámsterdam y Londres– y operará en trece países, entre ellos España, Alemania y Francia» según aparecía publicado en El Confidencial.com. Capital norteamericano, alemán y español en una relación que no podía ser nada más que la definida por la cadena

imperialista: El gigante resultado de este proceso tendrá una deuda inicial de 7350 millones de dólares: 3300 millones para compensar a los accionistas de la sociedad estadounidense (que es la única que cotiza en bolsa) que recibirán 14,5 dólares por cada título de la nueva compañía.

En esta, los socios españoles controlarán un paquete del 34% de las acciones, ocuparán cinco puestos de un total de 17 en el consejo de administración y será la española Sol Daurella la presidenta (su familia controlaba el 55% de Coca-Cola Iberian Partners y ahora controla el 18,7% de la nueva compañía). Pero esto tiene un precio: el abaratamiento de costes que se persigue para la obtención de más réditos para el capital, intentando reducir la deuda, en España, eslabón débil de la cadena, se ha traducido en un plan de prejubilaciones y un ERE con el cierre de una serie de plantas que pretendía deshacerse de unos 2000 trabajadores.

Sin embargo las lógicas y dinámicas del capital encuentran a veces obstáculos inesperados. En este caso la férrea resistencia de un grupo de trabajadores y sus familias de la factoría de Fuenlabrada que se ha opuesto a este ERE en una lucha en la que los tribunales han declarado nulo el ERE. La compañía, «cumpliendo la ley» tendría que reabrir la factoría y reincorporar a los trabajadores a sus puestos de trabajo pero lo que es ley para el «común de los mortales» no lo es para el capital y las multinacionales que sirviéndose de todos los medios, legales e ilegales, intentan, en las escasas ocasiones en las que la ley no les da la razón, no cumplirla hasta que aprueben otra ley. Se muestran otra vez los límites de la democracia: la cadena imperialista, la concentración y la centralización del capital, de forma que todo lo demás está subordinado. Frente a esto sólo puede oponerse una lógica de sometimiento del capital desde la lucha obrera. La reapertura parcial de la planta de Fuenlabrada el 7 de septiembre es un jalón más en el camino de los espartanos.

7

La contraparte al aumento de la conflictividad laboral es la persecución judicial de huelguistas, incluso mediante montajes policiales, cuyo caso más simbólico es el de Alfon, un joven vallecano acusado de llevar un artefacto explosivo en la huelga general de 14 de noviembre de 2012. Cuatro años de prisión por una mochila encontrada en el suelo, sin huellas y con la cadena de custodia rota. Si no han conseguido reformar el derecho a huelga, cuestión que tienen en agenda los capitalistas y sus servidores y por la que hacen campaña en los medios de comunicación al menos desde la huelga de los controladores de 2010, en la práctica estamos viviendo la estrategia del miedo, la represión y las represalias frente a las respuestas al empeoramiento generalizado de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Sin embargo, la represión no se limita a la clase preferente.

Desde el 1 de julio de 2015 está vigente la *Ley de Seguridad Ciudadana*, más conocida como *Ley Mordaza*, que ha causado sorpresa e inquietud en numerosos lugares, no sólo de dentro de nuestro país sino también de fuera, en la que encuentran similitudes entre el escenario que abre y los de tiempos pasados como el periodo franquista. Esta ley, recurrida por la oposición al Tribunal Constitucional, fue aprobada en solitario por el Partido Popular. Consta de 44 artículos que permiten a la policía de forma rápida, sin tener que pasar por el sistema judicial, imponer multas económicas -otra forma de represión- que oscilan entre los 100 y los 600000 euros.

¿Cuál es la clave pues de esta polémica ley? ¿Aumentar los niveles de libertad de la población para la protesta y la reivindicación eficaz? Es evidente que no. Se trata de, sin impedir la posibilidad de la protesta, hacer que pierda la máxima eficacia posible ya que dota al gobierno de turno de mecanismos, a través de la utilización de la policía por el Ministerio del Interior, para amedrentar y debilitar la protesta popular: en cualquier momento y echando mano de la ley, la calle, que es el espacio donde la conflictividad social está encontrando su vía más visible de expresión (los centros de trabajo son espacios donde toda forma de «democracia» está ausente hoy por hoy, con cada vez menos derechos para los trabajadores) puede convertirse en un cuartel. Y decimos «puede» porque una de las características de mayor calado gira alrededor de la discrecionalidad con la que los cuerpos policiales aplican la ley: sujetos a las orientaciones que



les lleguen desde sus mandos presionados, por los delegados del gobierno, ya se ha constatado que comportamientos y acciones idénticas son castigadas con contundencia o quedan en nada. Es pues una herramienta que lejos de procurar «ordenar la protesta ciudadana» y garantizar el «ejercicio de los derechos por parte de toda la ciudadanía» permite limitar y acotar los espacios, escenarios y formas de lucha de las clases populares restringiendo la eficacia alcanzada.

Ya en 2011 el bipartidismo suspiraba porque cesara la movilización ciudadana, augurando las siete plagas de Egipto y, a la vez, en boca de González Pons contra Zapatero, invitaba a imitar a los egipcios en plena primavera árabe. Sin embargo, la consigna más repetida fue: estamos en democracia, presentaos a las elecciones. Conflicto y cooperación entre fracciones del poder. Repitiendo algunos ecos del pasado histórico, el éxito en las elecciones municipales del 24-M de las candidaturas de unidad popular en grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, y La Coruña ha tenido respuesta también en el ámbito de la política, del sufragio en sus dos vertientes, pasivo y activo.

En cuanto al sufragio pasivo, el Gobierno de Rajoy ha presentado un proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General que modifica 41 artículos referentes a las elecciones municipales. El alcalde sería el candidato que encabece la lista que obtenga un 35% con una diferencia del 5% sobre la segunda o un 30% con una diferencia del 10%, ya que se le asignaría la mitad más uno de los concejales. Caso de que ninguna candidatura cumpla estos requisitos, se procedería a una segunda vuelta entre aquellas que hayan superado el 15%, prohibiendo expresamente la coalición o unión entre candidaturas. Gobernaría la que obtenga el 40% o una ventaja del 7%. Solo si no se produjese nada de lo anterior, el reparto de concejales seguiría como en la actualidad.

Esta reforma viene precedida de las quejas del PP por los pactos celebrados habitualmente entre partidos de izquierda, mucho más plural y fragmentada que la derecha. Su propaganda viene a decir algo tal que así: que los gobiernos los decidan los ciudadanos y no los partidos en los despachos; que gobierne la lista más votada. Hasta qué punto es innecesaria se demuestra con una colección de titulares publicados por Infolibre: «El 94% de los más de 8.000 alcaldes españoles procede de la lista más votada» y «El 90% de las principales ciudades tienen como alcalde al de la lista más votada»; «Ocho de cada diez alcaldes ya gobierna con mayoría absoluta»; «El PP es el partido que tiene más alcaldes que perdieron las elecciones: 135 repartidos por 14 comunidades».

Respecto al sufragio activo, la Marea Granate, conformada por los emigrantes y cuyo lema es «No nos vamos, nos echan», ha denunciado que en los comicios celebrados desde 2014 (europeos, autonómicos y municipales) más del 75% de la ciudadanía en el exterior no pudo votar. No cabe duda de que sus votos no irían a parar en su mayoría a las sacas del bipartidismo. Mediante el cierre del censo sin previo aviso, la necesidad de rogar el voto si se está excluido de dicho censo, el establecimiento de plazos limitados de recepción de papeletas, la imposibilidad de realizar la mayor parte de los trámites a distancia y la negligencia informativa y de gestión en los consulados sería suficiente para explicar el hecho de la baja participación. Pero aún hay que dificultarla más exigiendo de la ciudadanía tiempo y dinero para trámites y viajes hasta los consulados. Además, la mera inscripción en el censo sirve también para... ¡perder la cobertura sanitaria en el sistema español! En las elecciones generales este modus operandi será repetido: si la fecha final es el 20 de diciembre, el censo será el vigente a 31 de julio.

Si la situación en España respecto a las libertades y derechos que tradicionalmente se han considerado la quintaesencia de la democracia burguesa o derechos humanos de primera generación (reunión, manifestación, sufragio, etc.) comparte la tónica general de recorte con los de segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales), la perspectiva no es mejor desde el punto de vista de los derechos humanos de tercera generación, solidaridad internacional y medioambientales.

Los miles de refugiados que han entrado ya en, o se encuentran a las puertas de, la UE son un ejemplo palpable de las consecuencias de la exportación de la democracia otánica al Norte de África y al Oriente Próximo y Medio. Si los medios de comunicación insisten en la evidente tragedia humanitaria, en los problemas europeos para coordinar una respuesta de acogida y en denominarla insistentemente «crisis de refugiados sirios», hay que preguntarse quién sale beneficiado de todo esto. En primer lugar, se produce el chantaje occidental de exigir la salida de Al Asad del gobierno para enfrentar al grupo terrorista autodenominado «Estado Islámico», cuando la realidad es que estos refugiados no son sólo de nacionalidad siria e irakí, sino también libia, afgana y de otros países que han sido bendecidos con la promesa de la democracia burguesa mediante la destrucción orquestada de sus estados. En segundo lugar, Europa está viviendo la tensión entre los defensores de la solidaridad internacional y los constructores de muros. Tan tremebundo espectáculo va dirigido al público en general en lo que respecta a la amenaza de la entrada de yihadistas, mientras que los millones de europeos castigados por la crisis ven en los refugiados una nueva competencia para el recortado bienestar. En tercer lugar, aumenta la presión en los países del sur de Europa, donde se estaban pergeñando proyectos y un eje de emancipación de la Troika, y en el frente de Europa Oriental, donde el fascismo se carga de razón entre las masas populares con vistas a frenar a Rusia, que está resistiendo tanto en Ucrania como en la guerra de los precios del petróleo. En cuarto lugar, tenemos a Francia, ex-potencia colonizadora en Siria, donde el Frente Nacional se ha negado a acoger refugiados allí donde gobierna, mientras que el presidente Hollande, en un gesto electoralista, ha optado como salida a la inoperancia europea el inicio de bombardeos al EI.

La Asamblea General de la ONU que se celebra en estos momentos –finales de septiembre– discute dos posiciones contrapuestas: la rusa, que defiende el apoyo al gobierno de Damasco salido de las últimas elecciones, y la otánica, con Obama a la cabeza, que plantea una transición política en Siria con la exigencia de la salida del gobierno de Al Asad, al mismo tiempo prosiguen los bombardeos al EI de una coalición de países sin mandato de la ONU. Si se tiene en cuenta que estos bombardeos se producen sin colaboración con los principales combatientes en el terreno contra el EI, el PKK y el ejército sirio, veremos que esta desestabilización cumple objetivos estratégicos de la política del Pentágono. Para terminar cabe la pregunta: ¿por qué ahora ese éxodo masivo? ¿Por qué no hace un año o dos?

Los derechos medioambientales en España, que pueden ser vistos como derechos democráticos transgeneracionales, están siendo recortados a una velocidad endiablada, con miras oligárquicas para diseñar una nueva burbuja del ladrillo y evitar la persecución de los delitos cometidos. En declaraciones de Theo Oberhuber de Ecologistas en Acción a Diagonal: «El PP ha trabajado rápido estos cuatro años. En materia medioambiental, [Miguel Arias] Cañete y ahora la ministra [Isabel García] Tejerina han sido capaces de cargarse toda una legislación ambiental protectora con más de 20 años de trayectoria por una serie de leyes desreguladoras que eliminan ‘las trabas ambientales’: la Ley de Costas, la Ley de Parques Naturales, ahora la Ley de Montes y todavía falta otra antes de que acabe la legislatura, la Ley de Patrimonio Natural. No es un accidente, es la línea de este Gobierno de desregularizar y privatizar». La Ley de Montes no sólo exime de la moratoria de treinta años para construir en suelo quemado, sino que impide actuar a los 6.400 agentes forestales –cuando conozcan un delito tendrán que avisar al SEPRONA de la Guardia Civil, con un número de efectivos cinco veces menor. En el mismo medio, el naturalista Joaquín Araújo afirma que esto representa en el campo la «semimilitarización bajo los cuerpos armados del Estado. Es un retroceso al primer franquismo», mientras que los representantes de los agentes forestales indican que este es un primer paso para abrir el mercado del medio rural a las empresas de seguridad privada, negocio en el que juega un papel destacado la derecha más rancia.

Frente a este panorama, pensando ya en las elecciones generales de diciembre y en la previsible reforma constitucional, en caso de que PP, PSOE y Ciudadanos sumen los 234 diputados



necesarios, reforma que no es necesario insistir que irá totalmente contra el sentido del proceso constituyente que defendieron las masas populares en el 15M, no queremos colaborar en eso que ha sido llamado con propiedad el «culebrón de la confluencia». En estos días se suceden los análisis acerca del resultado de las elecciones catalanas como fracaso de la confluencia, del mismo modo que después de las municipales se defendía su éxito. El escenario de un callejón sin salida que se podía prever antes de las elecciones autonómicas convertidas en plebiscitarias ha sido eludido y veremos durante estos meses dos cosas: una guerra de posiciones respecto a la formación del gobierno catalán, y cómo continúa el proceso independentista, y una guerra de maniobras para que la campaña electoral de las generales tenga un único tema: Cataluña. Deseamos que las clases populares y sus organizaciones resuelvan de la mejor manera posible el laberinto que ya indicó Gerald Brenan que es España.

Sin duda el electoral es un campo de batalla importante, pero no es el de Laberinto. Tiempo habrá después de las generales de analizar lo sucedido en el año electoral por excelencia que será 2015. En el convencimiento de que la salida a los innumerables problemas concretos aquí expuestos, que planteados en su propio marco no tienen solución, donde los límites de la democracia actual se manifiestan en toda su crudeza, recordamos una de las últimas frases del Manifiesto del Partido Comunista: «los comunistas laboran por llegar a la unión y la inteligencia de los partidos democráticos de todos los países». En esta perspectiva incluimos tres artículos que reflexionan acerca de la relación entre el comunismo y la democracia. En primer lugar, en la sección Nuestros Clásicos, presentamos Tesis sobre la democracia burguesa y la dictadura del proletariado de Lenin, con una pequeña introducción de Valentín Berrocal Ruiz, miembro del Consejo de Redacción, titulada Democracia: la realidad y lo Real de sus espacios, materias y tiempos. En segundo lugar, un artículo del profesor Carlos Fernández Liria, Comunismo para la ciudadanía. En tercer lugar, una reseña de Christopher Morales del libro, coordinado por Slavoj Žižek, La idea de comunismo.

En el estado burgués la democracia es una liturgia que se proclama y se celebra hasta que las clases populares colectivamente (ya sea en el centro de trabajo, la calle, el marco del estado-nación burgués o la solidaridad internacional) deciden tomar las riendas de su destino contra los procesos de concentración y centralización del capital; entonces se rompe el encantamiento que envuelve la dominación de clase. Sin embargo la quiebra del espejo litúrgico no basta, hay que atravesar su marco y organizarnos de forma que se conjuguen la libertad individual con una acción unitaria y cohesionada: el marco del centralismo democrático.